

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-14155-2019
CARATULADO : MOLINA/C. D. E.

Santiago, doce de Junio de dos mil veinte

VISTOS:

En estos autos Rol C-14155-2019, comparece, don **NELSON GUILLERMO CAUCOTO PEREIRA**, abogado, domiciliado en Doctor Sotero del Río N°326, Oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de doña **ROSA ESTER MOLINA MOGOLLONES**, dueña de casa, con domicilio en Avenida Manuel Antonio Matta N°1571, comuna de Quilicura, de don **FERNANDO ANTONIO MOLINA MOGOLLONES**, chofer, domiciliado en Avenida Padre Alberto Hurtado N°0117, casa 9, comuna de Estación Central, y de doña **ADRIANA MÓNICA MOLINA MOGOLLONES**, dueña de casa, con domicilio en Arturo Scroggie N°157, Villa El Avellano, comuna de Los Ángeles, e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña **MARÍA EUGENIA MANAUD TAPIA**, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, conforme a los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que indica en su presentación.

El demandado contesta, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

Se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, respectivamente.

Se recibió la causa a prueba, rindiéndosela que consta en autos.

Encontrándose los autos en estado, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el actor deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios por la suma total de \$360.000.000.-, por concepto de daños morales que se han infligido a sus representados, con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado, o la suma que el Tribunal determine, conforme al mérito de autos, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, todo ello con expresa condena en costas.

Señala, que los demandantes son hermanos de don Juan René Molina Mogollones, quien fue detenido el 29 de Enero de 1975, junto con la madre de su hija menor, doña Patricia Zúñiga Barros, embarazada en ese entonces, aprehensión que fue practicada por diez agentes de la



Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), trasladándolos en dos vehículos a un lugar llamado “Villa Grimaldi”, donde fueron objeto de múltiples amenazas y golpes, además de ordenárseles el despojarse de sus ropas y objetos personales, junto con iniciar sesiones de interrogatorios y torturas.

Expone, que dichas acciones fueron gestadas días antes, cuando un detenido que permanecía en el lugar referido fue obligado a establecer contacto telefónico con el primer afectado y concertar una entrevista con él y doña Patricia Zúñiga, para el día en que fueron detenidos.

Relata, que esta última, no obstante estar embarazada, además de ser careada junto con don Juan Molina, fue sometida a distintos tipos de tortura, tales como, aplicación de corriente, golpes y colgamientos, y aquel recibió un trato similar, en el cual fue colgado, mientras simultáneamente se le practicaban golpes y aplicaba corriente en todo el cuerpo, junto con mantenerlo con una alimentación sin glucosa.

Adhiere, que los hechos mencionados fueron ratificados por diversos testimonios de personas que permanecieron detenidas junto con él en Villa Grimaldi.

Sostiene, que las víctimas y otros dieciocho detenidos, fueron trasladados a un sector de Villa Grimaldi, denominado “La Torre”, y que, según varios testigos, don Juan Molina y otros detenidos desaparecidos fueron sacados de ahí con destino desconocido, y posteriormente, en julio del año 1975, el nombre del afectado apareció en la lista de los 119 chilenos que presuntivamente habían muerto en enfrentamientos en el extranjero.

Indica, que la veracidad de estos hechos jamás pudo ser comprobada, más aún, ningún Gobierno, ni siquiera el chileno, lo ratificó oficialmente.

Al respecto, hace presente que el nombre del afectado apareció en el diario “O`Día de Curitiba” (Brasil), publicación inexistente hasta ese único día, y que según El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación mejor conocido como “Informe Rettig”, sostiene al efecto que: *“El 29 de enero de 1975 agentes de la DINA detuvieron en Santiago al militante del MIR Juan René Molina Mogollones. Según múltiples testimonios Juan Molina fue conducido a Villa Grimaldi. En algún momento de su permanencia en ese recinto fue trasladado al lugar llamado “la torre” desde donde fue sacado con destino desconocido el 20 de Febrero junto con el grupo de los detenidos de Valparaíso. La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos”.*

Plantea que, con posterioridad, y ante los compromisos del Gobierno de Chile de reabrir los procesos por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se ordenó reabrir el Episodio “Villa Grimaldi”, en los autos Rol 2182-1998, Episodio “Villa Grimaldi, Cuaderno Principal”, sustanciados y fallados por los Iltmos. Ministro Sr. Alejandro Solís y



Leopoldo Llanos Sagristá, quedando fijados como hechos, los ocurridos cuando fueron detenidos los afectados; y en los cuales se estableció que don Juan Molina, fue una de las personas detenidas por la DINA, que permanecieron privadas de libertad en uno o más de los recintos de detención que detalla; fallo que, fue confirmado en todas sus partes, por la Illtma. Corte de Apelaciones de Santiago en los autos Rol 1719-2014, y luego, por la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2016, en los autos Rol 17887-2015, rechazando los recursos de casación de los condenados por los delitos respectivos.

Expone, que sus representados tuvieron que soportar durante todos esos años, el injusto tratamiento del Estado de Chile, que el daño que se les ha infringido es incalculable, lo que constituye una situación que, en un régimen de Estado de derecho democrático, no estaban obligados a soportar, creciendo y desenvolviéndose en la vida, con el trauma de su hermano secuestrado impunemente, torturado y hecho desaparecer hasta el día de hoy.

Concluye manifestando, que los hechos relatados y comprobados por las investigaciones judiciales, por organismos de derechos humanos y por las comisiones de verdad oficiales del Estado, configuran un crimen de lesa humanidad que en la actualidad provoca un daño moral a sus representados, en su calidad de hermanos de la víctima, marcando de una manera determinante la vida de éstos, al hacer desaparecer de manera brutal a su familiar, razón por la cual, deduce la presente demanda, a objeto de que se les repare de manera adecuada y completa por los graves hechos relatados que constituyen un crimen de lesa humanidad del cual son víctimas.

Agrega, que los antecedentes consignados, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional, como de "lesa humanidad", según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nürernberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas, con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido aprobada en 1998. Crímenes tan ignominiosos e intolerables para la humanidad que precisamente han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional; circunstancia que resulta fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en el caso de autos. En tal sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido que "resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores, lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito "contra la humanidad o de lesa humanidad", tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional" (cfr. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 16.11.06, "Ruz y otro con Fisco de Chile", Rol N° 4.464-01, considerando N° 2.)



Así pues, continúa, el artículo 38 inciso 2°, de la Constitución Política de la Republica, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el estado podrá reclamar antes los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

El fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y legal, -y todas ellas cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.

Al respecto, cita diversos fallos de la Excma. Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y diversas doctrinas nacionales.

De este modo, expone, que además de las disposiciones reseñadas y en conjunto con los Arts. 6° y 7° de la Constitución, que, a su vez, establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como ha quedado en evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Sostiene, que este conjunto de normas y principios han reconocido aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional, conformado por el derecho internacional humanitario, así como del derecho forma parte; de las que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas ha ido adquiriendo, progresivamente, una serie de obligaciones que responden a la obligación general de "respeto de los derecho esenciales del hombre" por parte de los Estados.

Señala que, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. Concretamente, en materia de Derechos Humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. Al respecto, cita normas de la CPE.



Expone, que la correcta resolución del caso sublite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la ley de bases de la administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños, contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Afirma, que la diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Cita doctrina, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Refiere, que la materia que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional por sobre las meramente privadas, (normas de responsabilidad extracontractual del Código Civil), implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino que, además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivada de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, continúa, en toda sociedad democrática y liberal los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física, libertad ambulatoria de una persona – derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra carta fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Razona que, si bien por un lado es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala expresamente la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte, la ausencia de regulación jurídica expresa, impone al juez interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los principios generales del derecho respectivo que, en el caso concreto, orientan al Derecho administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el Art. 38 de la Corte Internacional de Justicia, el que transcribe.

Al respecto, agrega, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de la Haya desde los albores del siglo XX, ha establecido que: "es un principio de derecho internacional, que la jurisprudencia a considerado "incluso una



concepción general del derecho", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como sensación por los daños extra-patrimoniales incluyendo el daño moral." (cfr. Corte I.D.H., caso Velásquez Rodríguez. indemnización compensatoria).

Manifiesta, que en este mismo orden de ideas, nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", que en su principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: "3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos (....)

Finalmente, cita diversos fallos de la Excma. Corte Suprema en los que ha declarado la Imprescriptibilidad de la acción civil que emana de un crimen de lesa humanidad.

Relata que, en el caso de autos, la reparación a los demandantes -hermanos de la víctima-, en relación al daño moral que se les ha provocado, se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que no estaban jurídicamente obligados a soportar. La dolorosa situación a la que se han visto enfrentados configura, claramente, un daño moral que según la Jurisprudencia es un daño indemnizable.

Define, que el daño moral es el que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales, es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito, y en general toda clase de sufrimiento moral o físico.

Respecto a la prueba de éste, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.



Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personalísimo para que se infiera el daño. Cita jurisprudencia al respecto.

En este contexto, señala que imaginar una cifra que pueda reparar todo este daño es imposible. No obstante, la justicia exige pretensiones y medidas de reparación concretas, por ello, solicita que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total \$360.000.000.- (trescientos sesenta millones de pesos) para sus representados, los demandantes -hermanos de la víctima-, doña ROSA ESTER, don FERNANDO ANTONIO y doña ADRIANA MÓNICA, todos de apellido MOLINA MOGOLLONES, específicamente, \$120.000.000 (ciento veinte millones) para cada uno de ellos, a título de indemnización por el daño moral que se causaron como consecuencia directa de los ilícitos cometidos en contra de su hermano, don JUAN RENÉ MOLINA MOGOLLONES, en manos de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que el Tribunal determine en justicia.

SEGUNDO: Que, la demandada contesta, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes, oponiendo las siguientes excepciones, alegaciones y defensas.

En primer lugar, opone la excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por haber sido preteridos legalmente, los actores, quienes accionan en sus calidades de hermanos de la víctima, y de reparación satisfactiva, atendida las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, puesto que para comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones, los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, continúa, el denominado dilema “justicia versus paz”, es uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado, para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos



públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, las que se proponen como programas de reparación. Estos programas, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Expone, que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Además, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley, el que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, indica que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123, el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión, se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas, han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:



A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig)

B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

C) Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992;

D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-

En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Concluye, que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizados los demandantes de la presente causa.

Excepción de prescripción extintiva.

A continuación, la demandada opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda, en todas sus partes.

Plantea, que así, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el día 10 de mayo de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, en caso, que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo invocado.

Expresa que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles y cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible. Por ende, la



imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Afirma, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Sobre esta materia, recuerda, que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Así, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Expone que, además, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Al efecto, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema pronunciada con fecha de 21 de enero de 2013, en sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Finalmente, afirma, que aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, ninguno de ellos contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Sobre el particular, invoca preceptos contenidos en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; los Convenios de Ginebra de 1949; la Resolución N°



3.074, de 03 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y, la Convención Americana de Derechos Humanos.

En relación a esta última Convención destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva, en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Indica, que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a los Tribunales chilenos, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Señala, que este planteamiento ha sido reconocido por el más alto Tribunal del país, quien ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Concluye, que en consecuencia, no existiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En subsidio, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto



pretendido de \$120.000.000, por cada uno de los demandantes, es decir, un total de \$360.000.000.

Hace presente, en relación al daño moral, que no se puede dejar de considerar que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos, en la etapa probatoria del mismo.

Indica que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Por otra parte, advierte, que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

En subsidio de las excepciones de preterición legal, reparación integral y de prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se deberá considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Destaca, que el no acceder a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho, en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente hace presente, que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, indica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.



En consecuencia, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma en que han sido solicitados en la demanda de autos.

TERCERO: Que, la parte demandante evacua la réplica, ratificando todas y cada una de las acciones, antecedentes y fundamentos de hecho y consideraciones de derecho sobre las cuales se funda el libelo.

Hace presente, que las excepciones interpuestas por la contraria, consistentes la de “preterición en lo económico” y de “reparación satisfactiva”, en consideración a la calidad de hermanos que tienen sus patrocinados respecto de la víctima, por el motivo de que ya han sido indemnizados, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123 y 19.980, le parece absolutamente errado, ya que los montos que otorgan, sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990, las cuales, en ningún caso, reparan íntegramente el dolor experimentado por los demandantes.

A mayor abundamiento, afirma, que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener los familiares, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible.

Agrega, que le parece razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones, que se produjo un crimen de lesa humanidad, el que a su vez generó un daño moral a las víctimas de autos.

Añade, que los pagos que efectúa el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega, además de reconocer el deber de indemnizar.

Reafirma lo anterior, señalando que, la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece en su artículo 2 que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”, no siendo la palabra promover sinónimo de reparar, y que en el caso sub lite, sus representados no han sido resarcidos íntegramente, al día de hoy, por dicho daño.

Agrega, que dicha ley, no considera incompatibles las reparaciones económicas, y menos entonces, las simbólicas, con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24, que dispone: “La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiese corresponder al respectivo beneficiario”, por lo cual, no sería posible descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber existido reparaciones simbólicas y beneficios de salud para los dolientes que se encuentran en la misma línea o situación parental de los mandantes.



Concluye entonces, que, al no establecer la referida ley, incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión o cualquier otro tipo de reparación, y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, resulta insostenible la excepción invocada por el Fisco, señalando una serie de fallos de la Exma. Corte Suprema, así lo comprueba.

Manifiesta, que si se aceptara la tesis Fiscal en el caso del monto de la reparación que han recibido las víctimas, dicha indemnización estaría fijada de forma unilateral y absolutamente arbitraria, vedándoles a aquéllas discutirlo, siendo esto, un razonamiento contrario a cualquier principio básico del Derecho.

Informa, que este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos.

Afirma, que la demandada incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado, lo que resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios, así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que aquélla alega la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”, lo que resulta incompatible y contrario a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración, reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla, incluso, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone.

En cuanto a la excepción de prescripción, arguye, que el señalar por la contraria que la acción interpuesta en autos está prescrita, es errado, atendido que la acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38º inciso 2º de la Constitución Política de la República), desconociendo las reglas de responsabilidad contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a la cual, no es correcto ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes, bastando tener a la vista su propio artículo 63, junto con una serie de precedentes jurisprudenciales que detalla, reforzando esta idea.

Plantea, que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos



Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, debiendo la demandada saber y aceptar el principio jurídico mundialmente reconocido por todas las sociedades democráticas, relativo a que los delitos de lesa humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.

Aclara, que la de autos, no es una acción de indemnización de perjuicios común que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales, sin olvidar aquéllas internacionales vinculantes para el Estado de Chile, a propósito del inciso 2° del artículo 5 de La Constitución Política.

En cuanto al monto solicitado y los reajustes correspondientes, estas alegaciones dicen relación con el fondo de la acción deducida y con una cuestión que procede sólo si se acoge la demanda interpuesta, por lo cual, será el tribunal quien deberá pronunciarse sobre ello, determinando su reajustabilidad desde la dictación del fallo de primera instancia, ya que es ese el momento procesal idóneo.

CUARTO: Que, la demandada evacúa dúplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en su contestación, conforme a las cuales solicita el rechazo de la demanda, exponiendo, además, lo siguiente:

1.- En relación a la excepción de preterición legal y reparación satisfactiva alegada respecto de demandantes, hermanos de la víctima, manifiesta que la ley 19.123 y otras posteriores encaminadas al mismo fin, han buscado resarcir de un modo general y equitativo, los daños provocados durante la dictadura militar. Teniendo en cuenta los limitados recursos de las arcas fiscales, se buscó establecer una reparación pecuniaria directa, mediante la entrega de bonos o pensiones en dinero a los familiares más cercanos, a saber, padres, hijos y cónyuge de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En el mismo contexto, se excluyó a los hermanos y a otros parientes más lejanos de dichas reparaciones pecuniarias, por preterición legal, sin embargo, se les incluyó dentro de los beneficios otorgados mediante prestaciones estatales y dentro del conjunto de reparaciones simbólicas, que miradas en su conjunto y bajo el contexto descrito en su contestación, se puede concluir que el Estado de Chile ha reparado el daño provocado, a través del programa PRAIS.

2. Respecto a la excepción de prescripción, reitera lo señalado en su escrito de contestación.

3.- En cuanto al monto demandado, estima que es excesivo, consideración que no cambia debido a los montos fijados en otras causas, respecto de las cuales también se sostuvo que eran desproporcionados.



4.- En lo que respecta a la fecha desde la cual se deben calcular los reajustes e intereses, reafirma lo ya señalado.

QUINTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su pretensión, la demandante acompañó:

1.- Certificado de nacimiento de don JUAN RENÉ MOLINA MOGOLLONES.

2.- Certificado de nacimiento de doña ROSA ESTER MOLINA MOGOLLONES.

3.- Certificado de nacimiento de don FERNANDO ANTONIO MOLINA MOGOLLONES.

4.- Certificado de nacimiento de doña ADRIANA MÓNICA MOLINA MOGOLLONES.

5.- Copia de fallo Rol 2182-98 dictado, con fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, por el Ministro de Fuero, Leopoldo Llanos Sagristá, en el cual se condena y absuelve a los sujetos allí individualizados por los delitos descritos, en el que figura el nombre del afectado don JUAN RENÉ MOLINA MOGOLLONES, hermano de los demandantes y víctima de los delitos que se singularizan.

6.- Copia de la sentencia Rol 1719-2014 dictada, el doce de septiembre de dos mil quince, por la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago.

7.- Copia del fallo Rol 17887-2015, dictado con fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por la Excma. Corte Suprema.

8.- Certificado emitido por la Subsecretaria de Derechos Humanos doña Lorena Recabarren Silva, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que consta la calidad de víctima calificada de violaciones a los derechos humanos de don Juan René Molina Mogollones.

9.- Copia de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, en virtud de la cual el Estado de Chile ha sido condenado al pago de indemnizaciones a víctimas de la dictadura cívico-militar cuyas acciones civiles impetradas fueron rechazadas por la justicia chilena por considerar que estaban prescritas.

10.- Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en la causa caratulada “Marcón con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas, mediante la cual se rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, ordenando pagar a cada actora la suma de \$100.000.000.

11.- Informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (FASIC), denominado “Consecuencias de la desaparición



forzada, sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos”, del mes de agosto de 2003.

12.- Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención de salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990

13.- Informe del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, denominado “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos”, suscrito por la Directora Ejecutiva, Elena Gómez Castro, de enero de 2018.

SEXTO: Que, además la actora rindió prueba testimonial, haciendo comparecer a los testigos, doña Sonia Gabriela y Clara Eugenia, ambas de apellido Leyton Gatica, y de doña Elizabeth Clara Navarro Barahona, quienes interrogados en forma legal y separada, declaran conocer a la familia de don Juan René Molina, hace varios años; especialmente, a doña Rosa Esther Molina Mogollones, demandante y hermana del referido.

Todas afirman, que esta última manifiesta un gran deterioro provocado por la desaparición de su hermano, don Juan Molina, viendo postergada su realización personal, al haberse hecho cargo, no sólo de su madre enferma e hijos propios, sino también del hijo menor del afectado, quien padecía una grave enfermedad, muriendo a muy temprana edad.

Las dos primeras, agregan, que lo anterior también influyó en su condición física por los cuidados que les practicaba, debido a su débil estado de salud.

SÉPTIMO: Que, en estos autos se ha ejercido la acción de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los demandantes con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado al Fisco de Chile, que causaron la muerte de don Juan René Molina Mogollones.

En su defensa, el Fisco de Chile opone, en primer lugar, excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los actores preteridos y de reparación satisfactiva, y excepción de prescripción extintiva de la acción ejercida. En subsidio de las excepciones anteriores, solicita que la regulación del daño moral considere los pagos ya recibidos por los demandantes.

OCTAVO: Que, respecto de la defensa planteada por el Fisco de Chile, que dice relación con la excepción de reparación satisfactiva, por haber sido ya indemnizados los demandantes al amparo de los beneficios previstos en las leyes N°s 19.123 y 19.992 y sus modificaciones.

NOVENO: Que, el artículo 1° de la Ley N°19.992, establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la nómina de personas reconocidas como víctimas, que forma parte del Informe de la



Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2°, prescribe que “la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años; y, a \$1.549.422, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; la que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°2.448 de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las leyes N°s 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación, optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Con todo, aquellas personas que ejerzan la opción antedicha tendrán derecho a un bono de \$3.000.000, el que se pagará por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción”.

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley, señala que: “la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869 de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”.

DÉCIMO: Que, de la norma legal citada, es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social, más no una indemnización por el daño moral vivido por aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la excepción de la improcedencia de la indemnización demandada por preterición legal de los demandantes, la defensa yerra en señalar que nuestra legislación establece un orden de prelación de manera general para todas las instituciones jurídicas existentes, y que se les ha excluido de dichas reparaciones, toda vez que se les consideró en la entrega de otros beneficios otorgados mediante prestaciones estatales, como beneficios de salud a través del programa PRAIS, entendiendo que el Estado de Chile ha reparado el daño provocado.

En el caso sublite, nada obsta a que los hermanos de la víctima concurren a esta sede, reclamando el daño extra patrimonial sufrido con ocasión del delito de lesa humanidad cometido por agentes del Estado, a saber, respecto de su hermano don Juan René Molina Mogollones, por lo que, tal excepción será rechazada, según se señalará en lo resolutivo del presente fallo.



A mayor abundamiento, cabe hacer presente que, para fundar dicha excepción se amparan, básicamente, bajo las argumentaciones vertidas para la excepción de reparación satisfactiva, la cual también ha sido desestimada.

DUODÉCIMO: Que, en subsidio de la excepción anterior el demandado opone la de prescripción, por consiguiente, se examinará su procedencia.

Que, en este orden de materias el actor ha señalado, que la acción impetrada no sería prescriptible por su especial naturaleza, no siendo aplicables las disposiciones del Código Civil, sino que las normas internacionales de Derechos Humanos.

DÉCIMO TERCERO: Que, esta Magistratura disiente de aquella postura, pues ello importaría aceptar el establecimiento jurisprudencial de acciones imprescriptibles, en contra del texto expreso de la ley, en este caso, del artículo 2.497 del Código Civil, que dispone que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, las Iglesias, Municipalidades, Establecimientos y Corporaciones Nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

De la cita, es posible concluir que no es efectiva la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que ni el Constituyente ni el Legislador la declaran en forma expresa, por lo cual cabe entender la vigencia de la norma general, siendo la prescripción, como institución básica de seguridad jurídica, plenamente aplicable a favor y en contra del Estado, según el caso.

DÉCIMO CUARTO: Que, no obstante, y como se razonara en el motivo anterior, resulta pertinente aplicar al caso concreto la institución de la prescripción consagrada en nuestro Código Civil, incorporando también, las figuras que contempla dicha institución, como son la suspensión, interrupción, renuncia de la prescripción, etc.

Así, de un atento examen de los antecedentes que obran en autos, es posible colegir que, sin perjuicio de encontrarse prescrita la acción indemnizatoria que pretenden los actores, con la publicación de la Ley N°20.874, de fecha 29 de octubre de 2015, el Estado demandado ha reconocido su condición de deudor para con los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, los requisitos de la renuncia a la prescripción se encuentran en las normas comunes para ambos tipos de prescripciones, específicamente, en el artículo 2494 del Código Civil que dispone: *“La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo*



después de cumplida. Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor”.

Así también, la doctrina señala que: *“La renuncia expresa resultará de una explícita declaración de voluntad del deudor. La renuncia tácita proviene de la ejecución de ciertos actos que muestran inequívocamente la intención de renunciar, porque son incompatibles con la voluntad de aprovecharse de la prescripción”.* (Manual de Derecho Civil; de las obligaciones, Ramón Meza Barros).

DÉCIMO SEXTO: Que, discurre en esta misma línea, el fallo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 19 de enero de 2015, Rol N°9.485-2014, que señala: *“OCTAVO: Que existe una circunstancia que con diversas denominaciones es exigida por los tratadistas y la jurisprudencia como esencial para que exista renuncia tácita de la prescripción. Ella es la referente al carácter de los hechos constitutivos de este tipo de renuncia.*

Así, para que pueda determinarse la existencia de la misma, se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos concretos del deudor. Se ha resuelto por la jurisprudencia que debe existir una manifestación de voluntad que sea realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad, lo que debe desprenderse de los hechos en forma clara e incuestionable.

NOVENO: Que de lo narrado queda en claro que es de la esencia de la renuncia en mención, que los hechos en que se la apoya no puedan recibir otra interpretación, o sea, éstos deben ser de tal naturaleza que prueben, de forma irrefutable, la inequívoca voluntad de renunciar al ejercicio de aquella defensa, en el sentido que ellos no puedan ser interpretados –como se dijo– sino de una manera única, sola, necesaria y lógica”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de otro lado la Ley N°20.874 señala: *“Artículo 1°.- Otórgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000 (un millón de pesos), a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente (...)*

(...) Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura (...).”

DÉCIMO OCTAVO: Que, la norma legal transcrita da cuenta que, por medio de esta ley, existió un reconocimiento de carácter general, que alcanzó a todas las personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, pero también existió un reconocimiento específico y concreto del Estado para con las víctimas, que se materializó con la entrega de \$1.000.000.-

Además, tratándose de una iniciativa legal del ejecutivo, la que luego de su tramitación culminó con la publicación de la misma, no da lugar a dudas de que ambos hechos constituyen actos propios del



Estado deudor, en consecuencia, la ejecución de éstos demuestran la intención de renunciar a la prescripción, pues la orden de pagar una suma de dinero –aunque sea parcial– contenida en dicha ley constituye: primero, un reconocimiento de la calidad de deudor del Estado y consecuentemente del derecho de los acreedores; y segundo, porque dicha conducta resulta incompatible con la voluntad de aprovecharse de la prescripción.

DÉCIMO NOVENO: Que, reafirma lo anterior la historia de la ley, pues en diversos pasajes del mensaje reconoce la existencia de la obligación de reparar los daños cometidos por agentes del Estado, así señala: *“(...) Adicionalmente y, considerando un argumento ético, cual es, que durante el período de la dictadura, fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, por lo que el Estado debe reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que causó (...)”*.

Además, el mensaje señala que el objetivo del proyecto de ley es: *“(...) Hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a sus derechos humanos que les afectaron y que son constitutivas de crímenes internacionales. Así, con este proyecto de ley completamos un capítulo más en la reparación pecuniaria de los seres humanos que fueron víctimas de prisión política y tortura (...)”*.

VIGÉSIMO: Que, a mayor abundamiento, y pese a que los actores refieren como hecho constitutivo de la renuncia a la prescripción la mencionada Ley N°20.874, lo cierto es que ella no compone el único acto de reconocimiento del Estado de su calidad de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, y por ende de renuncia a la prescripción, esta afirmación la sintetiza en diversos fallos (Rol N°2497-2010 de fecha 27 de junio de 2013; Rol N°4798-2011 de fecha 17 de julio de 2013; y, Rol N°14-2013 de fecha 16 de octubre de 2013) el Ministro de la Excma. Corte Suprema señor Muñoz, al señalar que: *“(...) Las acciones enunciadas, por las que el Estado renunció a la prescripción extintiva, se pueden resumir en la creación de la comisión para establecer lo sucedido respecto de atentados a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, la que una vez emitido su informe se dicta la Ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992, disponiendo que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación la cual tendrá por objeto “la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990”; posteriormente se crea una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura por Decreto Supremo N° 1040 de 26 de septiembre de 2003 y luego por Decreto Supremo N° 43 de 5 de febrero de 2010 se establece la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, todo es producto de la ejecución de las leyes 19.213, 19.992, 20.405 y 20.496 (...)”*.

(...) Así al concretarse cada uno de estos beneficios en el tiempo, el Estado renuncia en ese caso particular a la prescripción extintiva, puesto que el hecho es uno mismo y no es posible dividirlo por el objeto de la prestación de que se compone la



reparación, la responsabilidad ha sido reconocida al igual que el derecho de las víctimas y se asume con cada uno de esos actos (...)”.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en este mismo sentido, cabe hacer presente, lo que a juicio de esta Magistratura, constituye el último acto relevante de reconocimiento expreso del Estado en esta materia, que se concreta en la contestación que realizara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de la demanda que interpusieran en su contra en el caso: *“María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”*, por la responsabilidad que le cabe al violar los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en síntesis, y en lo que nos atañe, el Estado manifestó: *“[...] su voluntad de aceptar las conclusiones y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan contenidas en el Informe de Fondo adoptado por la CIDH. En particular, señala que faltó al derecho a las garantías judiciales por no determinar el derecho de las presuntas víctimas a obtener una reparación en el ámbito civil. También, faltó al derecho a la protección judicial al no garantizar un recurso efectivo, en particular, al no hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos, reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través del mecanismo de las comisiones de verdad. Asimismo, la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las presuntas víctimas imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación y dificultó hacer uso adecuado del recurso que es idóneo para reparar violaciones a derechos humanos.*

A partir de lo anterior, se cuenta con elementos suficientes para tener por configurada la responsabilidad objetiva del Estado por incumplir con su deber de garantizar los derechos a las víctimas [...], al no lograr restablecer la plenitud del derecho a obtener una reparación; [...] reconoce que las medidas que fueron adoptadas en los procesos judiciales no fueron efectivas de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, práctica judicial que ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia adoptado por los tribunales nacionales y que se mantiene en la actualidad”.

En cuanto a las reparaciones, el Estado señaló: *“al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”.* Así, *“previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias. No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tomando en*



cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...)”.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, llama la atención de esta Magistratura, que pese al reconocimiento expreso que hiciera el Estado ante un organismo internacional, éste por intermedio de su representante -Consejo de Defensa del Estado- sigue oponiendo la excepción de prescripción extintiva ante acciones de la misma naturaleza como la de autos, pese al compromiso internacional que adoptara en el contexto del juicio referido en los motivos anteriores.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, finalmente, en cuanto al requisito de oportunidad de la renuncia, es de público conocimiento que, ya sea que se contabilice la época de la renuncia a la prescripción en la fecha en que el ejecutivo envió el proyecto de Ley N°20.874 a la cámara respectiva -el día 9 de julio de 2015- o que se considere la fecha de publicación de la misma -29 de octubre de 2015-, es un hecho no controvertido por las partes que ello se produjo después de cumplida la prescripción, acreditándose la exigencia del inciso 1° del artículo 2494 del Código Civil.

En consecuencia, habiendo operado la renuncia tácita a la prescripción extintiva, esta excepción tampoco puede prosperar como se dirá, en definitiva.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, desechadas las excepciones opuestas por la defensa, corresponde avocarse al análisis del daño como presupuesto de la responsabilidad. Sobre este punto, el profesor René Abeliuk Manasevich concibe el daño moral como: *“El menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos como consecuencia del hecho ilícito, que afecta la integridad física o moral del individuo”*.

De otra parte, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha definido el daño moral como: *“La lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra”*.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad física a que fue sometido el hermano de los demandantes, con motivo de su detención y muerte, por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlo, es que corresponde acceder a la pretensión de los demandantes, ante el evidente daño moral.

Ello debido al temor ocasionado por las circunstancias de la época que naturalmente incrementaron dicha aflicción, y al hecho que las



secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal desarrollo de las personas, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, daño que sólo sentido común vislumbra, y que se constata en los informes acompañados en el motivo quinto.

En consecuencia, al tenor de lo consignado anteriormente, se encuentra fehacientemente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes -con graves secuelas que perduran hasta la actualidad-, debido a la detención por agentes del Estado, con resultado de muerte de don Juan René Molina Mogollones, lo que además es ratificado por las declaraciones de los testigos, ya relacionadas en el motivo sexto.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por los demandantes, es necesario fijar su cuantía en dinero, para lo cual se considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, a fin de fijar el quantum indemnizatorio que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, por consiguiente, el daño moral provocado a los hermanos de la víctima Sr. Juan René Molina Mogollones, doña ROSA ESTHER, don FERNANDO ANTONIO, y doña ADRIANA MÓNICA, todos MOLINA MOGOLLONES, se fija prudencialmente en la suma de \$ 30.000.000.- (Treinta millones) para cada uno.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, como el daño causado debe ser reparado de manera integral, las sumas determinadas deberán pagarse reajustadas según el IPC y más intereses, en la forma que se dirá en lo resolutivo, y sólo desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Fundamentos por los cuales, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1568, 1698, 1699, 1700, 2332, 2492, 2493, 2494 y 2497 del Código Civil; 144, 160, 170, 341, 342, 346, 384 y 748 del Código de Procedimiento Civil, y Ley N°20.874, se declara:

I.- Que, se rechazan las excepciones de reparación satisfactiva del daño; de la improcedencia de la indemnización demandada por preterición legal de los demandantes; y, la excepción de prescripción extintiva de la acción.

II.- Que, en consecuencia, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a cada uno de sus hermanos, éstos son, doña ROSA ESTHER, don FERNANDO ANTONIO, y doña ADRIANA MÓNICA, todos MOLINA MOGOLLONES, la suma de \$ 30.000.000.- para cada uno.

III.- Que las cantidades expresadas en el resolutivo II, deberán ser reajustadas según la variación del IPC, entre el mes anterior a que el presente fallo se encuentre ejecutoriado y el mes anterior al de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero



reajustables, aplicados desde la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y la de su pago efectivo.

IV.- Que, no se condena en costas al demandado por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Consúltese, si no se apelar.

Archívense los autos, en su oportunidad

PRONUNCIADA POR DOÑA MARIA PAULA MERINO VERDUGO. JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, doce de Junio de dos mil veinte**

